

17.000 desaparecidos buscan sepultura definitiva en Líbano

Familiares de las víctimas luchan por que se apruebe una ley que facilitaría exhumaciones



Natalia Sancha

2 JUL 2016 - 00:00 CEST



Imagen de un niño en un edificio de Beirut tomada el pasado 13 de abril, día del 41 aniversario de la guerra civil. Mohamed Azakir REUTERS

Condenados por la historia, decenas de miles de españoles y libaneses comparten en vida el lastre de no poder enterrar a sus muertos. Transcurridos 26 años desde que finalizara la guerra civil libanesa (1975-1990), la primera propuesta de ley que permitiría exhumar las fosas comunes en el país reposa hoy sobre la mesa del Parlamento. Se estiman en 17.000 los desaparecidos durante tres lustros de guerra fratricida y confesional.

Sus familiares han emprendido el mismo tortuoso camino que recorren los allegados de los entre 130.000 y 200.000 desaparecidos de la guerra civil española. Y en él se topan con desafíos similares, siendo la reticencia de las autoridades el principal escollo. Abrir las fosas es abrir la caja de Pandora que remueva el cercano pasado y, por ende, exija responsabilidades. En Líbano el pasado dicta el presente, donde las 18 confesiones que alberga fueron redistribuidas geográficamente por los frentes. Sin embargo, los libaneses son conscientes de que sentar a los culpables en el banquillo es tarea tan improbable como imposible. Los mismos líderes de las milicias que masacraron a miles de conciudadanos están hoy apoltronados en las sillas que rigen al país, o en su defecto, sus hijos.

Al igual que sucediera en España con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, es en una organización, y no en el Gobierno, donde los civiles han depositado sus esperanzas. El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva cuatro años engrosando con entrevistas y pruebas los expedientes de 2.500 familias para, llegado el momento, transferirlos a las autoridades libanesas. La pelota queda así en el campo de un Gobierno interino y huérfano de presidente tras dos años de parálisis política, para el que el terrorismo, la vecina guerra siria y las sanciones económicas priman sobre la agenda nacional.

De aprobarse, la propuesta de ley permitirá que las Fuerzas Internas de Seguridad archiven muestras biológicas de los familiares de los desaparecidos para una futura exhumación. Una lucha contra reloj.